



Financiación comunitaria

Canarias reclama a Bruselas dos años más para gastar los fondos de energía

El Gobierno y siete patronales sectoriales avisan al Estado y a la Comisión Europea que ampliar el plazo es imprescindible para ejecutar los proyectos

R. ACOSTA
[Las Palmas de Gran Canaria](#)

El Gobierno canario y siete organizaciones empresariales reclaman al Ejecutivo central y a la Comisión Europea una prórroga de dos años y medio para la ejecución y justificación de las ayudas de los fondos europeos *NextGeneration* destinados a la construcción y despliegue de instalaciones de energías renovables para la generación de electricidad. El plazo finaliza el 30 de junio de 2026 y la petición es que se amplíe hasta el 31 de diciembre de 2028.

En un escrito conjunto, el Ejecutivo y las empresas del ramo admiten que el grado de ejecución y justificación de los fondos es muy bajo por los numerosos problemas que se están encontrando tanto las administraciones públicas como los operadores para ejecutar y justificar la financiación debido a la lejanía e insularidad, la limitación de la mano de obra cualificada y las complicaciones derivadas de las autorizaciones administrativas y los informes de impacto ambiental. A modo de ejemplo, ya se han recibido 163 renuncias de varios programas de subvenciones por un presupuesto cercano a los 20 millones de euros y que suponen más de 18,4 megavatios (MW). Por otro lado, más de la mitad de los 500 expedientes activos han solicitado la prórroga por más de 88 millones de euros, que equivalen a 73 MW.

La Consejería de Transición Ecológica, que dirige Mariano Hernández Zapata, argumenta que la estrategia «está suponiendo un sobreesfuerzo de gestión de fondos que no están sufriendo otras comunidades autónomas». El presupuesto gestionado por Canarias en las cuatro convocatorias que se tramitan a nivel estatal es de unos 14,5 millones de euros, mientras que de la estrategia de energía sostenible, las Islas reciben 301,7 millones de euros más, lo que supone un 200% más de fondos, por lo que «no es comprensible que el horizonte temporal de finalización sea el mismo para todos».

El Ejecutivo y las organizaciones empresariales advierten que Canarias se puede ver abocada a perder

el tren de la transición energética y la descarbonización del Archipiélago si no se amplían los plazos. «El alcance de los fondos *NextGeneration* y la singularidad de Canarias hacen imprescindible disponer de más tiempo para garantizar que ningún proyecto estratégico quede fuera», resalta el consejero Hernández Zapata. Asimismo, destaca que el Ejecutivo ha activado un plan de choque específico para acelerar la tramitación y ejecución de los proyectos, pero que «podría resultar insuficiente sin una ampliación razonable».

Las organizaciones que se unen a esta petición de prórroga son la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete), la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y

Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Femepa), la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), las Empresas Canarias Productoras de Energía Solar (Sorecan) y la Unión Española Fotovoltaica (Unef). Las empresas consideran que la ampliación de los plazos hasta 2028 «es una necesidad objetiva para Canarias» porque se trata de «proyectos estratégicos de gran complejidad técnica y ad-

Ya se han recibido 163 renuncias a planes de autoconsumo energético y descarbonización

ministrativa que requieren tiempos realistas para garantizar su correcta ejecución». De este modo, «forzar los calendarios actuales puede poner en riesgo tanto la calidad de las inversiones como la viabilidad de muchas iniciativas impulsadas por empresas canarias», señalan.

Entre los programas con más dificultades se encuentran el fomento de la autosuficiencia energética en las administraciones públicas, el desarrollo de comunidades energéticas, la descarbonización del sector industrial o el fomento de la generación fotovoltaica. En este último, de un total de 277 expedientes por 95,4 millones para 48 MW, ha solicitado prórroga el 77%, por lo que podrían perderse hasta 84 millones de euros y 42 MW de potencia si no se amplía al menos un año la vigencia. ■

LP / DLP



Instalación de paneles solares en un aparcamiento de una zona residencial de Las Palmas de Gran Canaria.